

SENTENCIA DEL 25 DE MARZO DE 2009, NÚM. 71

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 5 de octubre de 1988.
Materia: Civil.
Recurrentes: Sucesión Martínez Almonte.
Abogado: Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna.
Recurrido: Domingo Almonte.
Abogado: Dr. Francisco A. Campos Villalón.

CÁMARA CIVIL

Casa

Audiencia pública del 25 de marzo de 2009.

Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Sucesión Martínez Almonte, representada por el señor Julio Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identificación personal núm. 8099, serie 61, contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago el 5 de octubre de 1988, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Francisco A. Campos Villalón, abogado del recurrido, Domingo Almonte;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 9 de enero de 1989, suscrito por el Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna, abogado de los recurrentes, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 13 de febrero de 1989, suscrito por el Dr. Francisco A. Campos Villalón, abogado del recurrido, Domingo Almonte;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 13 de marzo de 2009, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, jueces de esta cámara, para integrar la

misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 3 de abril de 1991, estando presente los Jueces Néstor Contín Aybar, Fernando E. Ravelo de la Fuente, Leonte R. Albuquerque Castillo, Máximo Puello Renville, Abelardo Herrera Piña, Octavio Piña Valdez, Federico Natalio Cuello López y Rafael Richiez Saviñón, asistidos del Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) en ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario incoado por Julio Almonte, Antolín Martínez, Agueda Martínez, Juan Martínez, Virgilio Martínez, Margarita Martínez, Francisca Javiera Martínez, Oscar Valentín Martínez, contra Domingo Almonte, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 7 de agosto del año 1986, una sentencia que en su dispositivo expresa: “**Primero:** Declara adjudicatarios a Julio Almonte, Antolín Martínez, Agueda Martínez, Juan Martínez, Virgilio Martínez, Margarita Martínez, Francisca Javiera Martínez, Oscar Valentín Martínez, Sucesores de Vicente Martínez de los inmuebles embargados al señor Domingo Almonte, cuya descripción es la siguiente: Parcelas 579 y 659 del Distrito Catastral núm. 11 de Puerto Plata, con todas sus mejoras, por la suma de cincuenta y cuatro mil pesos oro (RD\$54,000.00), más las costas y honorarios del procedimiento ascendente a la suma de seis mil ochocientos setenta y siete con cincuenta centavos (RD\$6,877.50); **Segundo:** Se ordena el desalojo inmediato de cualquier persona que se encontrare ocupando, no importa su condición, los inmuebles en cuestión”; b) que sobre recurso de apelación intentado contra esa decisión, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, rindió el 5 de octubre de 1988, el fallo hoy atacado, cuyo dispositivo dice así: “**Primero:** En cuanto a la forma se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por el nombrado Domingo Almonte, contra la sentencia marcada con el núm. 388 de fecha 7 de agosto de 1986, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoado en tiempo hábil y de acuerdo con las normas legales vigentes; **Segundo:** Relativamente al fondo, se declara nula y carente de valor jurídico la sentencia núm. 388 de fecha 7 de agosto de 1986, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por ser improcedente y sin ninguna base legal, en razón de que la base de la demanda incoada por los Sucesores de Vicente Martínez contra Domingo Almonte, no puede generar derechos jurídicamente protegidos, en vista de estar cimentado sobre el fraude; **Tercero:** Se condena a la Sucesión Martínez al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor del Dr. Francisco Campos Villalón, abogado, que afirman estarlas avanzando en su mayor parte”;

Considerando, que la recurrente propone, en apoyo de su recurso, los medios de casación siguientes: “**Primer Medio:** Omisión de estatuir. Violación al artículo 141 del Código de

Procedimiento Civil; **Segundo Medio:** Violación al principio de la cosa irrevocablemente juzgada. Artículo 1350 del Código Civil; **Tercer Medio:** Violación al derecho de defensa”;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio, la recurrente expone que, “mediante conclusiones formales propuestas por ante la Corte a-quá, la sucesión Martínez Almonte solicitó la inadmisión del recurso de apelación, por el motivo de que el auto de adjudicación con el cual fueron favorecidos, dictado en fecha 7 de agosto de 1986, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, es un acto gracioso, el cual no puede ser atacado por los recursos ordinarios o extraordinarios, reservados a las sentencias propiamente dichas por ser actos contenciosos; que frente al medio de inadmisión propuesto a la Corte a-quá, era su deber ponderar la naturaleza del auto apelado, para deducir el alcance del recurso de apelación del cual estaba apoderada”;

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que la Corte a-quá fue apoderada del recurso de apelación contra una sentencia resultante de un procedimiento de embargo inmobiliario, por el cual, los inmuebles embargados fueron adjudicados a Julio Almonte, Antolín Martínez, Agueda Martínez, Juan Martínez, Virgilio Martínez, Margarita Martínez, Francisca Javiera Martínez, Oscar Valentín Martínez, contra Domingo Almonte; que el proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se llevó a cabo sin incidentes, de lo que resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo pues se limita a dar constancia del transporte en favor del persiguiendo, del derecho de propiedad del inmueble subastado;

Considerando, que, ciertamente como lo expresa la recurrente en casación, dicha decisión constituye una sentencia de adjudicación en un procedimiento de embargo inmobiliario, por lo que tratándose de una decisión de carácter puramente administrativo, no es susceptible de ser recurrida en apelación ante la Corte, sino de una acción principal en nulidad ante el mismo tribunal que la dictó, cuyo éxito dependerá de que se establezca y pruebe, que un vicio de forma se ha cometido al procederse a la subasta, en el modo de las pujas, o que el adjudicatario ha descartado a posibles licitadores valiéndose de maniobras tales como dádivas, promesas o amenazas o por haberse producido la adjudicación en violación a las prohibiciones del artículo 711 del Código de Procedimiento Civil;

Considerando, que, no obstante haberse producido conclusiones ante el tribunal de alzada, relativas al medio de inadmisión que se deriva de las reglas de orden público, la Corte a-quá, violó flagrantemente las reglas del debido proceso, al omitir dar respuesta al medio de inadmisión propuesto, incurriendo de esa manera, en su sentencia, en los vicios de exceso de poder, omisión de estatuir y violación del derecho de defensa al admitir y conocer un recurso cuya vía no estaba abierta, por lo que procede acoger los medios denunciados, y en consecuencia, que la sentencia impugnada sea casada, por vía de supresión y sin envío, por no quedar cosa alguna que juzgar;

Por tales motivos, **Primero:** Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia dictada en

atribuciones civiles el 5 de octubre del año 1988, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo; **Segundo:** Condena a Domingo Almonte al pago de las costas, con distracción en provecho del Dr. Manuel Sepúlveda Luna, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 25 de marzo de 2009, años 166° de la Independencia y 146° de la Restauración.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.suprema.gov.do